

CRONICA DEL MES.

Agosto-septiembre de 1982

Durante el mes de agosto hubo un despertar de acción política de parte de los partidos con representación en la Asamblea Constituyente. Las vacaciones con que se inició el mes, lejos de implicar una pausa y reposo en la vida política, se aprovecharon para concretar lo que se ha llamado "Pacto de Apaneca", por haber sido firmado en la finca que el presidente Magaña tiene en esa población del departamento de Ahuachapán.

Los secretarios generales de cuatro partidos con representación en la asamblea firmaron un acuerdo de gobierno de "unidad nacional", que contiene líneas de acción en el terreno de los derechos humanos, la recuperación económica, las reformas, la confianza y seguridad y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, para lo cual se constituirán comisiones de paz, de derechos humanos y política (la primera en integrarse en el mismo mes de agosto, lo cual dio pie a una serie de reclamos de parte del partido Demócrata Cristiano).

El partido Acción Democrática (AD), que ya a finales del mes anterior había publicado su protesta contra el reparto de puestos y había calificado al gobierno como "en crisis", no sólo no se adhirió a la firma del pacto, sino que públicamente explicó su oposición al mismo, indicando que no era más que la institucionalización de un reparto previo del poder, sin un programa mínimo de acción, configurado para servir intereses antagónicos de partidos, y que aunque los objetivos eran buenos difícilmente se alcanzarían mientras se mantuviera el *status quo* gubernamental.

Al final del mencionado pacto se puso en evidencia la división existente al interior del partido de Conciliación Nacional, pues un grupo encabezado por la diputado Castillo, denunció que los firmantes habían actuado a "espaldas de las bases políticas del PCN" y habían contravenido el Decreto No. 9 de la constituyente en cuanto al nombramiento de alcaldes, ya que las elecciones propuestas en el pacto favorecían al partido Demócrata Cristiano. El comité ejecutivo del partido Conciliación Nacional aclaró que no había división y que el documento del pacto había sido previamente entregado a los diputados para que lo estudiaran, cosa que desmintió posteriormente el grupo disidente.

La instalación de la comisión política, integrada por el presidente, los tres vicepresidentes, los ministros de defensa y de relaciones exteriores, más un representante de ARENA, otro del PCN y otro del PPS, motivó la airada protesta del PDC por haber sido excluido, en contra de lo acordado en el pacto, indicando que se reservaba la decisión pertinente (que, como siempre, se contenta con lo que le dan). Al mismo tiempo, el PCN condicionó su permanencia al cumplimiento del Decreto No. 9 en lo referente a la nominación de los alcaldes (por el presidente y los vicepresidentes), repartiendo las alcaldías entre los tres partidos mayoritarios; mientras el PDC exigía una cuota de 118 alcaldías, basado en los votos obtenidos el 28 de marzo.

El pacto, por consiguiente, mostró la débil ligazón del compromiso y dio oportunidad para evidenciar la fuerte lucha por el poder a todo nivel, y especialmente en torno al control de la

alcaldías, que parece ser punto clave en las futuras elecciones presidenciales, y también las escisiones en alguno de los partidos más importantes para poder gobernar en la actual composición de fuerzas políticas legales. Por otro lado, con ocasión de una moción para exención de impuestos a los expositores de la Feria Internacional, el enfrentamiento entre diversos diputados y partidos se elevó al nivel de acusaciones e insultos graves, hasta el punto de que hubo quienes se llevaron la mano a la cintura o a los portafolios, aunque se logró impedir que se dispararan tiros entre sí; esto motivó una vez más las vehementes protestas y acusaciones de los portavoces pedecistas contra los seguidores de ARENA.

De acuerdo a otro punto del pacto, se enviaron misiones a diversos países para informar de la situación del país y del recién firmado Pacto de Apaneca. Las comisiones se integraron con los tres vicepresidentes, el ministro de relaciones exteriores y representantes de los cinco partidos de la asamblea. La comisión principal se dirigió a Washington, para apoyar la certificación de Reagan ante el Congreso y para lograr la continuación de la ayuda. Raúl Molina (PCN) dijo a su regreso que el mayor obstáculo para la ayuda era el esclarecimiento del asesinato de las religiosas norteamericanas; mientras que Rigoberto Cornejo (PCN) informó que "toda perspectiva de negociación con la guerrilla está descartada".

Una vez asegurada la certificación de Reagan, las aguas volvieron a su cauce. No se han hecho más entregas de títulos de propiedad a beneficiarios de la reforma agraria, sino que ahora se pasó a indemnizar a los expropietarios, después de haber revaluado sus tierras y de haberles devuelto parte de ellas invocando "derechos de reserva", como lo denunciara Morales Ehrlich. Las cifras de muertos se elevaron a las cuotas anteriores y la represión y la violencia fueron tales que motivaron la protesta de ASI y ANEP. Se montó un gigantesco operativo de cateo en gran parte de la capital, con capturas de aeróbicos y otras personas; en los locales del Movimiento Gnóstico se capturó a cinco personas y en las del Movimiento Campesino Salvadoreño saquearon y destruyeron lo que había, al tiempo que se llevaron al guardián, quien apareció asesinado al día siguiente; mientras tanto, en el penal de Mariona se produjo una sospechosa fuga de cuatro reos, entre los cuales se encontraba el excomandante de Chinamequita, acusado del asesinato de una familia del PDC.

La Policía de Hacienda cobró en todo esto especial relevancia y publicidad. En el sindicato del transporte capturó a seis sindicalistas y lanzó fuertes acusaciones contra la directiva. Pero el hecho de mayor resonancia fue la toma de la escuela República Federal de Alemania, donde capturó a 9 alumnas, 3 empleados y 23 profesos-



res, acusándolos de ser miembros de ANDES y también integrantes de diversas agrupaciones del FDR-FMLN (ANDES sostuvo que estaban reunidos para elaborar la plataforma reivindicativa que presentarían ante la asamblea). En los medios informativos se dio amplia publicidad al hecho y se mostró a los capturados, con graves acusaciones, confesiones de parte de ellos y serias implicaciones delatorias. El hecho cobró especial importancia porque la directora de la escuela es esposa del entonces subsecretario de educación, profesor Serrano, quien inmediatamente hizo declaraciones y mostró el apoyo decidido del PDC; pero el problema siguió adelante, a través de amenazas anónimas, presiones de todo tipo para obtener su renuncia, y especialmente por medio de una acusación, profundamente difundida, de que el profesor Serrano había cometido delito de bigamia (con declaraciones de la segunda supuesta esposa). Como consecuencia, a finales del mes renunció a su cargo el subsecretario. También por esos días renunció el gobernador de San Salvador, miembro del PDC, por dificultades con el ministro del interior y obstrucciones en la actividad municipal amparándose en que su cargo provenía del sector militar; esta renuncia no parece tener relación con la anterior.

Por su parte la UPD y FEDECOPACES denunciaron que al interior mismo del gobierno hay enquistados enemigos de la reforma agraria que obstaculizan el proceso, impidiendo de todas las maneras posibles los mecanismos financieros, jurídicos y técnicos necesarios; paralizando de este modo su avance y queriendo convertir las cooperativas en sociedades capitalistas.

El ministerio de defensa, a su vez, salió al paso de rumores de golpe de Estado y de crisis ministerial, denegando que la derecha hubiera intentado algo así y que lo hubiesen impedido los diplomáticos norteamericanos y venezolanos, según lo anunciaron varias agencias de noticias internacionales. Sin embargo, en su informe anual ante la asamblea, reconoció que en el último año la Fuerza Armada había sufrido 3.798 bajas frente a los insurgentes, de las que 1.073 correspondían a muertos (40 de ellos oficiales de todos los rangos, incluidos 3 coroneles), 142 a desaparecidos y 2.583 a heridos; radios extranjeras afirmaron que esas cifras suponían el 20% de todos los efectivos militares.

La crisis económica que atraviesa el país, y de la cual periódicamente se va dando cuenta en las crónicas mensuales, más que por las quejas y lamentos de los interesados tanto del sector

empresarial como del laboral, de las presiones de los productores y de los trabajadores, de las acostumbradas acciones contra el transporte y la energía eléctrica, se desprende claramente de los informes presentados por los ministros ante la asamblea, de los cuales únicamente podemos apuntar los datos más sobresalientes (cfr. PRO-CESO, No. 78, págs. 3-4, para una información más completa).

El ministerio de planificación reconoció que las reservas internacionales netas se encuentran en -373 millones de colones, el saldo en la balanza de pagos es de -720 millones de colones; el algodón, pese al aumento del 12% en su precio, tuvo una disminución del 43% en el volumen exportado, lo que significó una reducción del 37% de su valor. El de comercio exterior sostuvo que la exportación decretó en un 3%, el PIB se contrajo en un 10% y el per capita disminuyó en un 11.5%. El de hacienda admitió un déficit financiero de 70.3 millones de colones, unos ingresos fiscales de sólo el 72% de los estimados y una deuda pública que asciende a 1.062,4 millones de colones; como causas señaló la fuga de capital, las plagas de las plantaciones, la adaptación a las reformas y la guerra civil. El de agricultura y ganadería informó de la autorización de pago a 224 propiedades intervenidas, por un monto de 394.5 millones de colones (en efectivo y la mayor parte en bonos), así como de la planificación del año agrícola venidero con un incremento del 21% en las siembras y el apoyo financiero y técnico por valor de 19 millones de colones. El de educación, en fin, lamentó que "internamente el personal continuaba con la moral baja y consecuentemente con niveles muy bajos de rendimiento, en igual circunstancia se encontraba gran cantidad de maestros. En lo que se refiere a los servicios que ofrece el ministerio, se continuaba enfrentando una cobertura cada vez más deteriorada y una cantidad declinante a un ritmo acelerado".

Esta situación motivó que el presidente Magaña cursara un documento a toda la administración pública para mantener congelados los sueldos y las plazas vacantes para el presupuesto de 1983, el cual deberá ser inferior al de 1982. Por otro lado, el Banco Central de Reserva ha autorizado a los bancos del país el mercado paralelo de dólares, lo que significa una devaluación real del colón, cuyo cambio se hace a 3.80 por dólares en tales instituciones.

Mientras tanto la guerra ha seguido su curso, en el campo estrictamente militar y en la

represión a la población civil, dejando un saldo de 681 muertos entre población civil (522 de ellos campesinos) y 129 capturados (23 de ellos maestros), elevando nuevamente la cifra a niveles de meses anteriores a los inmediatamente previos a la certificación de Reagan. El FMLN habría tenido 174 muertos y 11 heridos, de acuerdo al COPREFA, cifra que desmintió aquél. La Fuerza Armada montó dos grandes operativos: el primero, del 11 al 17 de agosto, en el departamento de Cuscatlán, zona de Guazapa-Suchitoto, con 3.000 efectivos que no lograron penetrar mayormente y que, según COPREFA, habría causado 90 bajas al FMLN; el segundo, del 17 al 30 del mes, en San Vicente, denominado "Cnel. Aze-nón Palma", en su primera fase no presentó grandes combates, sino que masacró a 500 personas (según Radio Venceremos) y causó tres bajas al FMLN, mientras que, según el COPREFA, habría dado muerte a 150 guerrilleros; la segunda fase dejó 85 bajas a la Fuerza Armada (según el FMLN) y 43 del FMLN (según COPREFA).

Operativos menores se realizaron en el departamento de La Libertad, donde se montó un cerco rural a Quezaltepeque y se capturó, entre otros, a un socorrista; en San Salvador, el primer operativo se llevó a cabo con 3.000 efectivos en 30 colonias del oriente de la capital; otro se realizó en la colonia Escalón con 1000 efectivos; también catearon una serie de colegios católicos, así como se allanó la cooperativa ACOOIPRI de la cual se llevaron 8.000 colones en mercadería.

Por su parte, el FMLN realizó en el mes de agosto 236 acciones (68 en el departamento de San Salvador, 39 en el de San Vicente, 28 en el de Usulután, 24 en el de Santa Ana, 23 en el de San Miguel), de las cuales 84 fueron de sabotaje, 10 tomas, 84 acciones militares (entre ellas 13 de ajusticiamiento) y 48 de otro tipo variado, recuperando 119 armas largas en total. Los muertos causados a la Fuerza Armada fueron 117 (3 subtenientes, 6 sargentos, 5 cabos y 103 soldados), pero si se incluyen los grupos paramilitares, daría un total de 49 "bajas", 120 muertos y 48 heridos. Las acciones más importantes realizadas en el mes de agosto fueron la destrucción del puente del ferrocarril, denominado "Guajoyo", en el departamento de Santa Ana, así como las tomas y aniquilamiento de las guarniciones de Guarjila y Potonico (Chalatenango), Ciudad Barrios y San Gerardo (San Miguel), las fincas de San Carlos y Yamabal (Morazán).

La Fuerza Armada, al mismo tiempo, intensificó la campaña en favor de las denuncias de to-

do sospechoso, principalmente de los que merodeen los puentes, las torres de conducción eléctrica y otros objetivos de sabotaje atacados por el FMLN insistentemente.

En el orden internacional ha sido de particular importancia la carta que el Papa dirigió a los obispos de El Salvador con ocasión de la fiesta religiosa nacional del 6 de agosto. En ella insta a la reconciliación entre las partes, al cese de toda hostilidad y renuncia al uso de las armas para detener la guerra fratricida entre los que consideran la lucha armada como instrumento necesario para un nuevo orden social y los que recurren a los principios de la seguridad nacional para legitimar represiones brutales. A ambas partes les toma en cuenta por igual, y mientras a los insurgentes nunca les acusa de marxismo (palabra que no aparece en el texto), dice darse perfecta cuenta de que la raíz de todos los males y de la actual crisis está en las situaciones de injusticia social, para añadir que la paz debe constituirse sobre la justicia, animada por el amor y hecha en la libertad. A esta carta le precedió pocos días antes una exhortación de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) hacia el diálogo y la paz entre las partes implicadas. Días más tarde el subsecretario norteamericano para asuntos latinoamericanos, Enders, tuvo también un discurso en el cual analizó desde su punto de vista la crisis en el área y, después de ofrecer el apoyo de su gobierno a los regímenes amigos y amenazados, habló de reconciliación (citando también al Papa) y de buscar toda oportunidad de diálogo y de paz, de desmilitarización y reducción de asesores militares hasta cero, de dar oportunidad a la izquierda para participar en las nuevas instituciones democráticas; acusó también a la extrema derecha de actuar a través de escuadrones de la muerte y de algunos elementos de las fuerzas de seguridad.

En Nicaragua, en cambio, la correspondiente carta del Papa a los obispos no tenía la misma orientación, sino que insistía en la unidad de la Iglesia y en someter la llamada "iglesia popular" a la obediencia jerárquica. La prohibición gubernamental de que se publicase, posteriormente retirada y explicada, motivó nuevas fricciones, que se vieron agravadas días más tarde por el "affaire" Carballo y su manipulación pueblerina, así como por las reacciones violentas desatadas principalmente en Masaya con saldo de varios muertos y heridos y la toma del colegio salesiano más el asilo político de varios de los sacerdotes de ese colegio (y la expulsión del director). Mientras tanto siguen agudizándose los problemas con

Honduras, hasta el punto de parecer inevitable un serio enfrentamiento armado.

La autorización del senado norteamericano al presidente Reagan para enviar tropas contra la expansión cubana, fue aplaudida por el ministro de defensa hondureño, por el presidente del congreso y por el vicescanciller, mientras el diario *Tiempo* criticaba la medida y su aplauso ya que "una guerra sería desastrosa para Honduras y no tendría justificación, pero al parecer eso es lo que menos importa". El excanciller costarricense, Facio, apoyaba la medida del gobierno hondureño; Mons. Rivera se preguntaba: "¿dónde queda la verdadera soberanía y autonomía de nuestros pueblos?"; los políticos venezolanos hicieron severas críticas; por lo que el gobierno hondureño se vio obligado a emitir un comunicado afirmando ser "absolutamente falso que Honduras haya solicitado al gobierno de Estados Unidos el envío de tropas, como también que esté vinculado a pretendidas maniobras intervencionistas". Por otro lado, el gobierno de Honduras se enfrentó a una huelga del magisterio que exigía un aumento salarial del 100%, objetando que no podía hacerle frente a causa de la crisis económica que padece: 600 millones de dólares fugados del país, una inflación del 40% y una deuda externa de mil millones de dólares. La firma del tratado comercial con El Salvador, realizada por los ministros de economía de ambos países, además de estipular un intercambio comercial restringido encontró inmediatamente problemas prácticos por las divisas y la competencia.

Guatemala tampoco se encuentra en situación bonancible, pues, se enfrenta a limitaciones comerciales con sus vecinos, México y El Salvador, al exigir que las transacciones comerciales se hagan en moneda guatemalteca o en dólares, por lo cual las fronteras terrestres estuvieron cerradas. La reunión de ministros de economía de Centroamérica evidenció los problemas de intercambio entre los países que padecen agudas crisis económicas y los buenos entendimientos y promesas se quedan en eso. Costa Rica, a su vez, prohibió el mercado libre de divisas para controlarlas y paliar su escasez. Guatemala, por otro lado, se enfrenta con la oposición y negación de los partidos políticos a integrar el consejo de Estado que promueve Ríos Montt.

En fin Venezuela, que desde el conflicto en las Malvinas ha tomado una política exterior agresiva frente a Estados Unidos, propuso por medio de su presidente, en la inauguración del

VII Consejo de SELA, que ese organismo sea el medio de consulta regional por excelencia, dejando a la OEA como foro para el diálogo con Estados Unidos.

El mes de agosto, por consiguiente, ha visto despertar la vida política interna en El Salvador, lo cual ha develado la profunda división del "gobierno de unidad", las luchas por el control de los partidos y de los mecanismos para el triunfo electoral futuro. Mientras tanto la guerra ha seguido su curso cruento, pero en el exterior parece se detectan presiones fuertes para encontrar algún tipo de solución política aceptable a los intereses dominantes.

Durante el mes de septiembre la actividad política nacional tuvo bastante intensidad. El conflicto generado en el seno del PCN explotó en una escisión del partido: diez de los catorce diputados de esa fracción en la asamblea optaron por romper la disciplina y se proclamaron "autónomos", mientras la Dra. Castillo era expulsada por el Comité Departamental de San Salvador del PCN. Sin embargo, ninguno de los diputados disidentes renunció a su asiento en la asamblea —como sugirió la directiva del partido— a pesar de que su elección no fue tanto nominal cuanto por lista partidaria, ya que antes de las elecciones no se conocían los nombres de los candidatos "por razones de seguridad" en la mayor parte de los departamentos.

El mes de septiembre tradicionalmente se ha declarado "mes de la independencia" y a lo largo del mismo se celebran actos conmemorativos en todas las instituciones y a todos los niveles; banderas, anuncios, desplegados periodísticos, alusiones a los próceres, actos cívicos se suceden e intensifican, hasta llegar al culmen en la fiesta del día 15 con un acto de máxima solemnidad en la capital y otros similares aunque de menor relevancia nacional en las cabeceras departamentales y demás poblaciones del país. Este año la fiesta estuvo repleta de grandes paradojas. El primer gobierno civil en muchos años realizó una actividad predominantemente militar, aunque en días anteriores y también fuera de la capital hubo participación cívica en los desfiles. El mismo discurso del presidente Magaña tuvo un contenido mayormente castrense, al exaltar las virtudes de la institución armada, su sacrificio en el momento presente, su lucha permanente, y al imponer medallas a los familiares de los caídos o a los heridos en combate contra los insurgentes a quienes inculcó de los males del país.

El núcleo de la celebración en el estadio Flor

Blanca se centró en la presencia y demostración de poderío militar, desde tropas de infantería especiales hasta aereotransportadas en una docena de helicópteros que se posaron en la cancha. Uno de los momentos culminantes fue el de la entrega del pabellón al batallón "Gral. Ramón Belloso", quien fuera con un ejército salvadoreño a Nicaragua para ayudar a expulsar de allí a los norteamericanos, mientras que ahora su nombre se le ha asignado a un batallón entrenado en los Estados Unidos para luchar contra los salvadoreños que tratan de disminuir la presencia y dependencia de su patria respecto a los Estados Unidos. Para completar lo paradójico de la celebración de la independencia salvadoreña, paracaidistas norteamericanos se lanzaron junto con los salvadoreños, y una orquesta militar de la Zona del Canal de Panamá interpretó música ligera de ritmos caribeños. Concluyó el acto con un desfile militar por las calles de San Salvador, hecho que no se conocía en los últimos cuatro años.

Por su parte, el FMLN celebró también la fiesta de la independencia, tratando de recuperar el himno y bandera nacionales, al tiempo que en sus discursos reivindicaba el sentido auténtico de la independencia acorde con su proyecto político. Radio "Venceremos" retrasmirió los actos e inauguró una emisora de frecuencia modulada para hacer más accesible su mensaje al pueblo.

Apenas concluidos los actos conmemorativos de la independencia, se desató sobre el país un recio temporal, el más calamitoso en muchos años, que durante cuatro días dejó caer cantidades devastadoras de agua unidas a vientos huracanados que incrementaron los destrozos. La capital y el occidente de la república fueron los más afectados. En el puerto de Acajutla el mar invadió barrios y causó daños serios en los muelles; un barco peruano encalló y varios de sus tripulantes desaparecieron. En la "Barra de Santiago" las inundaciones arrasaron muchos ranchos y casas de recreo. En el departamento de Ahuachapán, entre otras desgracias, una capilla protestante fue barrida por las aguas perecieron las 75 personas que se encontraban dentro en un acto de culto. En el departamento de La Libertad varias poblaciones sufieron daños cuantiosos en viviendas y vidas humanas. Muchas de las carreteras y caminos del país quedaron cortadas por derrumbes, árboles caídos, lodazales e inundaciones o desbordamientos de ríos. Tal vez lo que recibió mayor publicidad fue el "desastre de Montebello", una colonia capitalina que fue

arrasada por un gigantesco aluvión de agua y tierra desprendido del volcán —sin que hasta la fecha se haya dado una explicación congruente del hecho—, quedando sosterradas casas y personas bajo varios metros de tierra. Los datos oficiales indicaron un mínimo de cerca de 1.000 muertos, más de 7.000 casas arrasadas o gravemente dañadas y unos 40.000 damnificados; sin embargo, esas cifras pueden elevarse considerablemente, en especial en cuanto al número de muertos, a medida que se obtienen más informes.

La ayuda y las medidas de precaución se implementaron de inmediato, especialmente en la capital. La zona de Montebello fue declarada en cuarentena y sometida a ley marcial. Personas y entidades de todo tipo se movilizaron desde el primer momento para recabar ayuda y asistir a los damnificados, varios colegios y escuelas, así como otros locales públicos acogieron a personas afectadas. Campañas de recolección de ayuda se montaron con todo despliegue y la generosidad de todos fue un signo de solidaridad en la desgracia. Maquinaria pesada fue destinada a un trabajo incesante de salvación de víctimas atrapadas y de desenterramiento de cadáveres, aunque la magnitud de la tragedia sobrepasó todos los esfuerzos por encontrar restos humanos y pertenencias. El arzobispado de San Salvador se unió a las manifestaciones de dolor de todas las instancias públicas y privadas, y en un mensaje en que consideraba esa tragedia que se sumaba a las otras que sufre el pueblo, entre ellas la guerra, analizaba las causas de tantas desgracias y pedía que además de la ayuda momentánea se atendiera a las raíces del sufrimiento del pueblo, en especial a la precariedad de la vivienda, alababa la generosidad del pueblo y pedía a las parroquias y comunidades cristianas que ayudaran en la reubicación de los damnificados, para terminar exhortando que a estos males y a los provocados por los hombres se les encuentre una solución de justicia y amor.

La voz de la iglesia arquidiocesana parece haber tenido un nuevo eco, a juzgar por la campaña que se ha despertado, principalmente por una serie de publicaciones editoriales del **Diario Latino** en los que se acusa a Mons. Rivera de seguir los pasos de Mons. Romero, pues sus homilias son seguidas muy de cerca por el periodismo internacional; las aclaraciones y demandas de rectificación no hicieron sino que el periódico se mantuviera en su postura. El segundo domingo del mes Mons. Rivera denunció que antes de la



homilía andaba merodeando la emisora YSAX un jeep fuertemente armado, cuyos tripulantes hicieron preguntas amenazantes. Tanto Mons. Rivera como sus delegados en la misa dominical, repetidamente abogaron por el diálogo entre las partes beligerantes, por la negociación y la reconciliación, siguiendo las palabras del Papa en su carta última, a la vez que insistían en las causas del conflicto, la injusticia social y condenaban los abusos cometidos por ambas partes contendientes. En ese contexto, el Papa recibiría en audiencia al Canciller Chávez Mena, en los mismos días que a Yasser Arafat, aunque los medios de comunicación no informaron mayor cosa sobre la reunión ni sobre el contenido de la misma. Por otro lado, las iglesias de Santa Lucía y San Ramón fueron cateadas y se llevaron fotografías de sacerdotes y catequistas asesinados y de Mons. Romero, por "subversivos".

El problema conflictivo y la lucha por el reparto de alcaldías y gobernaciones, que había llenado parte del espacio y del tiempo de los partidos mayoritarios y las incriminaciones mutuas, se vio zanjado a finales del mes al concretarse un paso más del "Pacto de Apaneca" bajo la coordinación de la comisión política. El presidente Magaña, coordinador de la misma, hizo públicos dos acuerdos, el cronograma político y la distribución de alcaldías. Por el primero se propone a la asamblea constituyente, después de un considerando, integrar un nuevo consejo central de elecciones para el 30 de octubre de 1982, el cual

deberá elaborar una Ley Transitoria para el 30 de noviembre de 1982; la asamblea estudiará el proyecto para declararlo Ley antes del 15 de diciembre de 1982; encomendar al consejo central de elecciones la elaboración de un proyecto de Ley Electoral a más tardar el 30 de abril de 1983, el cual deberá aprobar la asamblea antes del 30 de junio de 1983; las elecciones presidenciales y municipales se realizarán a más tardar el 28 de marzo de 1984 y recomienda que la nueva constitución política sea promulgada antes del 31 de marzo de 1983. En cuanto a la distribución de alcaldías, se tomaron criterios para las cabeceras departamentales, para las poblaciones de más de 10.000 habitantes y para las menores de esa cifra, en orden a lograr una más equitativa distribución entre los tres partidos mayoritarios; de las cabeceras correspondieron al PDC, San Salvador, Sonsonate, San Vicente y San Francisco Gotera; al PCN, San Miguel, Ahuachapán, Usulután, Zacatecoluca y la Unión y a ARENA, Santa Ana, Chalatenango, Cojutepeque, Sensuntepeque y Santa Tecla.

Un serio escándalo, con implicaciones políticas, se desató a finales de mes, en el proceso seguido por el asesinato del presidente del ISTA y de dos asesores norteamericanos. Dos excabos de la Guardia Nacional reconocieron haber hecho los disparos mortales, pero obedeciendo órdenes del teniente Isidro López Sibrián y del Capitán Eduardo Avila, y que los industriales Sol Meza y Christ señalaron quiénes eran las

víctimas. Los dos oficiales inculcados habían sido detenidos junto con D'Aubuisson a comienzos de mayo de 1980 por los hombres de Majano bajo la acusación de conspirar para un golpe militar; D'Aubuisson lo reconoció ante las cámaras de televisión en la alocución que sostuvo con ocasión del primer aniversario de ARENA; dijo sentirse orgulloso de ser amigo de los inculcados. El teniente fue detenido e interrogado, pero se le dejó en libertad por falta de pruebas (parece ser que no fue reconocido en rueda de reos, tal vez por habersele modificado algunos rasgos característicos). El Capitán Avila (que se dice es pariente muy cercano de uno de los más altos dirigentes de ARENA) ocupaba un cargo diplomático en Costa Rica, y amparándose en esa calidad había cometido un acto de terrorismo contra un ciudadano salvadoreño en ese país, por lo cual fue declarado "non grato" y se desconoce su paradero a pesar de haber pedido la F.A. la colaboración de la INTERPOL para localizarlo. En fin, el abogado Rosales y Rosales, defensor de Sol Meza y Christ, fue detenido por lesiones contra otra persona.

En el plano económico la medida de la crisis la manifiestan los informes rendidos por los respectivos ministerios ante la asamblea. El de salud sostuvo que en un promedio mensual de 31 establecimientos no es posible dar atención médica, y que el presupuesto de hospitales se ha reducido en un 4.8%, mientras que en el ISSS hay una mora de casi 150 millones de colones entre la patronal y el Estado. Hacienda habló de un sacrificio fiscal de 152 millones de colones en 1981. La carencia de divisas está afectando seriamente a la existencia de medicinas, así como al intercambio comercial con Honduras. Las pequeñas ayudas, como donativos o como préstamos, que la espita norteamericana deja gotear continuamente, se verían incrementadas notablemente con los 75 millones de dólares asignados a El Salvador dentro del plan para la Cuenca del Caribe, dirigidos en primer lugar a la reactivación empresarial y a la creación de empleos. Mientras el PTB se ha reducido casi en un 10% en cada uno de los dos últimos años según el ministro de economía y el presupuesto para educación verá en el próximo año una disminución de casi 20 millones de colones, dos bancos incrementaron su capital social: el de Comercio pasó de 4 a 35 millones y el Capitalizador llegó a los 185 millones.

El Foro Nacional para el Análisis de la Problemática del Café tuvo lugar con gran co-

bertura publicitaria y a juzgar por los asistentes, la mesa directiva y los oradores principales, más bien parecía una convención de ARENA. Las resoluciones tomadas, que pretenden dar marcha atrás en las reformas que afectan al producto, incluyendo la disolución de INCAFE y el retorno a los privilegios ancestrales, fueron apoyadas por el ministro de comercio exterior, otra prueba más del control político del foro y de ese sector gubernamental. Por el contrario, la UPD publicó un pronunciamiento señalando las amenazas contra las reformas y apelando a la F.A. para que las defienda y ponga sus personeros en las instituciones responsables de las mismas, o a profesionales independientes.

Aunque no hubo en el mes cierres de empresas ni huelgas, de los que se tuviera conocimiento, los conflictos laborales y las tensiones por despidos, contrataciones "políticas", aumento en los transportes, congelación de salarios y represión al sector laboral organizado, suscitaron repetidas quejas de los sindicatos y agrupaciones laborales (IVU, Transportes, ISTA, AGEPYM). El miptes rompió su prolongado silencio publicando un comunicado en el que muestra el deterioro de las condiciones de vida por el alza de los costos mientras se prohíbe el incremento salarial en base al Decreto 544. El Consejo Salvadoreño de Menores, en fin, elaboró un estudio en el que se dice que en el Área Metropolitana de San Salvador hay 101 tugurios (barrios), 11 campamentos y 117 colonias ilegales, con una población de 343.152 personas, o sea, el 45% de los habitantes del área (si se añadieran los moradores de mesones la cantidad absoluta y relativa se elevaría considerablemente).

El ritmo de la guerra pareció declinar algo durante el mes de septiembre. El ministro de defensa y seguridad pública, Gral. García, dijo ante la Cámara Americana de Comercio que la guerrilla ya había sido derrotada aunque no erradicada, que su principal sostén es Nicaragua y que "algún día, como el Gral. Ramón Belloso, iremos a libertar a Nicaragua". En cambio, el FMLN hizo entrega solemne de 40 prisioneros de guerra a la Cruz Roja Internacional (12 más optaron por quedarse a combatir con el FMLN) y noticias internacionales hablaron de la liberación por el mismo conducto de subsecretario de defensa, Cnel. Castillo, aunque no se efectuó ni se dieron explicaciones.

Como consecuencia de las acciones represivas y de contrainsurgencia, durante el mes se conoció de 233 personas muertas entre la población



civil (91 de ellas campesinos), de las éstas 21 aparecieron decapitadas y 11 más torturadas. La cifra de capturados fue de 90 (24 de ellos campesinos), y las bajas del FMLN, según el COPREFA, habrían sido 94 muertos y 1 baja. La F.A. realizó dos grandes operativos: el primero en la costa de Usulután, desde el 29 de septiembre (hasta el 3 de octubre), en el que intervinieron de tres a seis mil efectivos, aunque con escasos resultados (ya que el FMLN atacó la retaguardia), habiendo causado 29 muertes a la guerrilla frente a 7 bajas propias (4 muertos y 3 heridos), según el COPREFA, que serían civiles de acuerdo al FMLN; el segundo fue en el norte de San Miguel, extendiéndose hacia Cabañas, con unos 3.000 efectivos (algunas agencias noticiosas internacionales hablaron de una masacre de 500 civiles, que no se ha confirmado fehacientemente), y habría causado 28 muertes a la guerrilla (COPREFA), que también serían civiles según el FMLN. Otros tres operativos menores realizó la F.A., uno en la zona norte de San Salvador (Nejapa-Apopa), otro por la zona de Suchitoto y un tercero en la de Jucuarán (Usulután), donde habrían muerto 60 guerrilleros según COPREFA, pero que el FMLN dijo que eran civiles.

La prolongación de la guerra exige una renovación e incremento crecientes de tropa. En el mes se realizaron varios actos de juramentación: 154 policías nacionales en Santa Ana, 430 en San Salvador, 300 reclutas en Chalatenango, 200 en el cuartel San Carlos de San Salvador, un número no determinado en Zacatecoluca (en cuyo acto

el presidente Magaña entregó 200 títulos a campesinos exarrendatarios), y un número no especificado de efectivos del primer Escuadrón Aerotransportado.

Por su parte, el FMLN realizó en el mes 190 acciones (61 en el departamento de San Salvador, 31 en el de San Vicente y 26 en el de Usulután), de las cuales 38 fueron de sabotaje, 12 tomas, 99 acciones militares (de ellas 10 ajusticiamiento) y 41 de otra serie diversa; causó 51 muertes a la F.A. (3 subtenientes, 5 sargentos y 43 soldados) y recuperó 15 armas largas. Sus acciones más importantes fueron las tomas de Aguilares (San Salvador), Sesori (San Miguel) y Jocoero (Morazán), todas ellas momentáneas, y los ataques a Nueva Granada, Jucuarán y S. Agustín (Usulután).

En el plano internacional la actividad para el área también fue intensa. Mientras los Estados Unidos aprueban el plan de ayuda para la Cuenca del Caribe, crearon un comando antiguerrillero unificado, siguen fortificando cada día más Honduras; el Gral. Nutting abogó por una mayor ayuda militar para la región, y Abrahams y Enders aprovecharon la convención de la SIP para atacar violentamente a Nicaragua y al FMLN; el presidente de México López Portillo, en un discurso renovó su apoyo a Nicaragua; el presidente Monge, de Costa Rica también presentó un plan similar de pacificación y se dirigió al presidente Magaña con una oferta de mediación sugerida por el presidente del FDR, Dr. Ungo, y juntamente con Panamá (que parece acercarse a los Estados

Unidos y alejarse de Cuba) emitió un comunicado conjunto contra el armamentismo en el área. Por su parte, en el congreso de los Estados Unidos se acusó a la CIA de que su servicio en Centroamérica más parece dirigido a apoyar una política determinada que a proporcionar información que sirva para elaborar una política consecuente.

Entre los consabidos problemas que afectan a los distintos países y a unos con otros, cabe resaltar dos principales. En Guatemala se incrementaron las masacres de campesinos, por otro lado el gobierno mexicano presentó una queja por haber penetrado en su territorio el ejército guatemalteco y haber asesinado a campesinos; también el temporal afectó severamente a ese país, causándole cientos de muertos y gran destrucción. En Honduras, a pesar del endurecimiento del régimen, un comando "Cinchonero" se tomó la Cámara de Comercio e Industria de San Pedro Sula, con unos cien rehenes, entre los que se encontraban dos ministros, el presidente del Banco Central y los principales empresarios; tras varios días de en-

cierro y, al parecer, sin haber conseguido ninguna de sus exigencias (liberación de presos político, entre ellos el comandante guerrillero salvadoreño Alejandro Montenegro, retiro de asesores norteamericanos, cese a la represión y a la intervención militar hondureña en El Salvador), salieron hacia Panamá en un avión, dejando en libertad a los rehenes. Días antes el Cnel. Torres Arias, antiguo jefe de inteligencia del ejército hondureño, hizo declaraciones en México sobre los planes conjuntos de los Estados Unidos y Honduras para invadir Nicaragua y sobre el papel hegemónico desempeñado por el Gral. Alvarez en la política de su país. La refutación fue más bien emotiva y personalista, como de conspirador en un frustrado golpe, pero el hecho esclareció la situación.

Un mes, por consiguiente, en el cual la actividad política salvadoreña se activó, mientras se mantuvo la guerra y se buscaron a nivel internacional alternativas políticas al conflicto.

Eugenio C. Anaya, h.

